

No. 54446*

**Peru
and
Ecuador**

Convention on social security concluded between the Republic of Peru and the Republic of Ecuador. Lima, 22 July 2011

Entry into force: 28 August 2013, in accordance with article 28

Authentic text: Spanish

Registration with the Secretariat of the United Nations: Peru, 19 April 2017

Note: See also annex A, No. 54446.

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**Pérou
et
Équateur**

Convention sur la sécurité sociale conclue entre la République du Pérou et la République de l'Équateur. Lima, 22 juillet 2011

Entrée en vigueur : 28 août 2013, conformément à l'article 28

Texte authentique : espagnol

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Pérou, 19 avril 2017

Note : Voir aussi annexe A, No. 54446.

**Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.*

[SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL]

CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL A SUSCRIBIRSE ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

La República del Perú y la República del Ecuador, en adelante, Partes Contratantes, Animados por el deseo de regular sus relaciones en el área de la Seguridad Social han convenido lo siguiente:

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1° DEFINICIONES

“El Convenio tiene por objeto proteger a los nacionales y a las personas comprendidas en el Artículo 3° del presente Convenio, la conservación de los Derechos de Seguridad Social, adquiridos o en vías de adquisición, sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas, conforme sus respectivos ordenamientos jurídicos internos y lo previsto en el presente Convenio y su correspondiente Acuerdo Administrativo”.

1. Las expresiones y términos que se indican a continuación tienen, para efectos de la aplicación del presente Convenio el siguiente significado:
 - a) “Legislación”: Las leyes, reglamentos y disposiciones sobre aportes y/o cotizaciones, pensiones o prestaciones de los Sistemas de Seguridad Social que se indican en el artículo 2° de este Convenio;
 - b) “Autoridad Competente”: Respecto del Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Respecto de Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS;
 - c) “Organismo de Enlace”: Organismo de Enlace es el encargado de la coordinación para la aplicación del Convenio entre las Instituciones Competentes, como también de brindar la información al interesado de los derechos y obligaciones derivados del mismo.
 - d) “Institución Competente”:
Para Ecuador, El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS; y,
Para el Perú, Institución responsable, de acuerdo con la legislación peruana, de la aplicación de la legislación señalada en el Artículo 2° del presente Convenio.
 - e) “Pensión”: Prestación pecuniaria que incluye suplementos, asignaciones y aumentos;
 - f) “Período de Seguro”: Período de cotizaciones reconocido como tal por la legislación bajo la cual se haya cumplido, así como cualquier lapso considerado por dicha legislación como equivalente a un período de seguro;
 - g) “Trabajador”: Toda persona que realiza una actividad económica dependiente o independiente, está o ha estado sujeta, a las legislaciones enumeradas en el artículo 2°;
 - h) “Trabajador Dependiente”: Persona que está al servicio de un empleador bajo un vínculo de subordinación y dependencia, así como aquella que se considere como tal por la legislación aplicable;

- i) "Trabajador Independiente": Persona que ejerce una actividad por cuenta propia, por la cual percibe ingresos, así como aquélla que se considere como tal por la legislación aplicable;
 - j) "Afiliado o Asegurado": Trabajador dependiente o independiente que se encuentre incorporado a un Sistema de Seguridad Social de cualquiera de las Partes Contratantes;
 - k) "Bono de Reconocimiento" (BdR): Designa, respecto del Perú a los títulos valores expresados en dinero y sujetos a una condición de redención que, conforme a la normativa peruana, represente los periodos de cotización efectuados en el SNP, con anterioridad a la incorporación a una AFP;
 - l) "Aportaciones y/o Cotizaciones Obligatorias": Son aquellos que los empleadores, trabajadores y/o Estado entregan obligatoriamente al Sistema de Pensiones que corresponda;
 - m) "Pensión con Garantía Estatal": Designa, respecto al Perú, a la prestación que otorga el Estado en el caso de los afiliados que con anterioridad a la incorporación al sistema de capitalización individual aportaban al sistema de reparto peruano conforme a la normativa peruana vigente.
2. Los demás términos o expresiones utilizados en el Convenio tienen el significado que les atribuye la legislación que se aplica en cada país.

Artículo 2° ÁMBITO DE APLICACIÓN MATERIAL

1. El presente Convenio se aplicará:
- A. Respecto del Perú, a la legislación sobre:
 - I) El Sistema Nacional de Pensiones administrado por la ONP en lo referente a prestaciones de pensiones de invalidez, jubilación y de sobrevivencia;
 - II) El Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, supervisado por la SBS, para beneficios como los de jubilación, invalidez y sobrevivencia, gastos de sepelio, así como los que establezcan las disposiciones peruanas;
 - III) Los regímenes de prestaciones de salud a cargo de ESSALUD.
 - B. Respecto del Ecuador a la legislación sobre:
 - I) La Ley de Seguridad Social y demás disposiciones vigentes sobre la materia.
2. El presente Convenio se aplicará igualmente a las disposiciones legales que en futuro complementen o modifiquen las mencionadas en el párrafo precedente, siempre que la Autoridad Competente de una Parte no comunique excepción alguna a la otra dentro de los seis (06) meses siguientes a la notificación de tales leyes, reglamentos o disposiciones.
3. La aplicación de las normas del presente Convenio incluye las disposiciones contenidas en otros convenios bilaterales o multilaterales celebrados por una de las Partes Contratantes, entre las que se encuentra la Decisión 583 de la Comunidad Andina y en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador y la Constitución Política del Perú.

Artículo 3°
ÁMBITO DE APLICACIÓN PERSONAL

El presente Convenio se aplicará a:

- a) Los nacionales de las dos Partes Contratantes que estén o hayan estado sujetos a la legislación mencionada en el artículo 2° del presente Convenio;
- b) Los nacionales de un tercer país, que estén o hayan estado sujetos a la legislación de una o ambas Partes Contratantes; y
- c) Las personas que deriven sus derechos de las personas mencionadas en las letras a) y b) precedentes.

TITULO II
PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES

Artículo 4°
IGUALDAD DE TRATO

Las personas referidas en el artículo 3° tienen las obligaciones y les corresponde los derechos previstos en la legislación de cada Parte, en las mismas condiciones que los nacionales de esa Parte.

Artículo 5°
EXPORTACIÓN DE PENSIONES

1. Las pensiones por invalidez, vejez y sobrevivencia que se paguen de acuerdo con la legislación de una Parte Contratante no podrán estar sujetas a reducción, modificación, suspensión o retención por el hecho que el beneficiario se encuentre o resida en la otra Parte.
2. Las pensiones señaladas en el numeral precedente debidas por una de las Partes Contratantes a los nacionales de la otra Parte Contratante que residan en un tercer país, serán efectivas en las mismas condiciones y con igual extensión que a los propios nacionales que residan en ese tercer país.

Artículo 6°
TOTALIZACIÓN DE PERÍODOS DE SEGURO

1. Cuando la legislación de una de las Partes Contratantes exija el cumplimiento de determinados periodos de seguro para la adquisición, conservación o recuperación del derecho a pensiones de vejez, invalidez o sobrevivencia, los periodos de seguro cumplidos según la legislación de la otra Parte Contratante se sumarán, cuando sea necesario, a los periodos de seguro cumplidos bajo la legislación de la primera Parte Contratante, siempre que ellos no se superpongan.
2. Cuando no sea posible precisar la época en que determinados periodos de seguro hayan sido cumplidos bajo la legislación de una de las Partes Contratantes, se presumirá que dichos periodos no se superponen con los periodos de seguro cumplidos bajo la legislación de la otra Parte Contratante.

3. El cómputo de los períodos correspondientes se regirá por las disposiciones legales de la Parte Contratante en la cual fueron prestados los servicios respectivos.
4. La respectiva Institución Competente determinará, con arreglo a su propia legislación, y teniendo en cuenta la totalización de los períodos de seguro, si el interesado cumple las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión. En caso afirmativo, determinará el importe de esa prestación a que el interesado tendría derecho, como si todos los períodos totalizados se hubieran cumplido bajo su propia legislación y fijará el mismo en proporción a los períodos cumplidos exclusivamente bajo dicha legislación.
5. El derecho a las pensiones de quienes, teniendo en cuenta la totalización de períodos de seguro, no cumplan al mismo tiempo las condiciones exigidas por las disposiciones legales de ambas Partes Contratantes, se determinará con arreglo a las disposiciones de cada una de ellas, a medida que se vaya cumpliendo dichas condiciones.

TITULO III DISPOSICIONES SOBRE LA LEGISLACIÓN APLICABLE

Artículo 7°

Los trabajadores a los que hace referencia el artículo 3° del presente Convenio, estarán sometidos a la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio ejerza o haya ejercido la actividad laboral, independientemente del Estado en que tenga su domicilio, o del Estado en que el empleador tenga su sede.

Artículo 8° REGLAS ESPECIALES TRABAJADORES DESPLAZADOS

Los trabajadores dependientes que ejercen su actividad en el territorio de una de las Partes Contratantes, y que sean enviados al territorio de la otra Parte por un periodo de tiempo limitado, continuaran sujetos a la legislación de la primera Parte, siempre que dicha permanencia no exceda de tres (03) meses. Si excediera dicho plazo, el trabajador podrá continuar sujeto a esa legislación, siempre que la autoridad competente de la Parte Contratante receptora, o quien ésta designe, brinde su conformidad.

Artículo 9° TRABAJADORES A SERVICIO DEL ESTADO Y PERSONAL DIPLOMÁTICO Y CONSULAR

1. Este Convenio no afectará lo dispuesto por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963.

2. El funcionario público que sea enviado por una de las Partes Contratantes al territorio de la otra Parte Contratante, continuará sometido a la legislación de la primera Parte, sin límite de tiempo.
3. Los nacionales de una Parte Contratante que se desempeñen como miembros del personal diplomático de una Misión Diplomática o Funcionarios Consulares de una Oficina Consular de esa Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante estarán sujetos a la legislación de la primera Parte Contratante.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 precedente, los nacionales de una Parte Contratante, contratados en el territorio de la otra Parte al servicio de una Misión Diplomática o de una Oficina Consular de la primera, estarán sujetos a las disposiciones legales de las segunda Parte Contratante salvo que dentro del período de seis (06) meses, contado desde el inicio de sus servicios o desde la vigencia del presente Convenio, opten por sujetarse a las disposiciones legales de la primera Parte Contratante.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, las disposiciones de los párrafos 2 y 3 de este artículo se aplicarán al personal de servicio contratado por:
 - a) Una Misión Diplomática u Oficina Consular;
 - b) Un Miembro del Personal Diplomático;
 - c) Un Funcionario Consular; y,
 - d) El Personal Administrativo y/o Técnico de la Misión Diplomática u Oficina Consular.

Artículo 10°
TRABAJADORES A BORDO DE UNA NAVE O AERONAVE

1. El trabajador dependiente que ejerza su actividad a bordo de una nave estará sometido a la legislación del Estado cuyo pabellón enarbole esa nave. Los trabajadores empleados en trabajos de carga, descarga y reparación de naves o en servicios de vigilancia u otros en un puerto, estarán sometidos a la legislación del país a cuyo territorio pertenezca el puerto.
2. El personal itinerante perteneciente a empresas de transporte aéreo que desempeñen su actividad en ambas Partes Contratantes estará sujeto a la legislación del país donde la Empresa tenga su oficina principal. Sin embargo, cuando dicho personal resida en el territorio de la otra Parte Contratante estará sujeto a la legislación de esa otra Parte Contratante.

Artículo 11°
EXCEPCIONES A LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 8° AL 10°

A petición del trabajador y del empleador, las Autoridades Competentes de ambas Partes Contratantes o las instituciones designadas por éstas, podrán de común acuerdo, establecer excepciones a las disposiciones contenidas en los artículos 8° al 10° para determinadas personas o categorías de personas.

**TITULO IV
DISPOSICIONES RELATIVAS A PRESTACIONES**

**Artículo 12°
PERÍODOS DE SEGURO INFERIORES A UN AÑO**

Las Instituciones Competentes de las Partes Contratantes que otorgan pensiones sólo otorgarán prestaciones si los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación aplicable, alcanza a sumar al menos un año, salvo que dichos períodos por sí solos concedan derecho a una prestación conforme a esa legislación.

**Artículo 13°
PRESTACIONES DE SALUD PARA PENSIONISTAS**

Las personas que residan en el territorio de una Parte Contratante y perciban pensiones conforme a la legislación de la otra Parte Contratante, tendrán derecho a prestaciones de salud no pecuniarias en caso de emergencias, así como de enfermedad dentro de la capa simple de cada país, de acuerdo con la legislación de la otra Parte Contratante, en las mismas condiciones que las personas que perciben prestaciones similares conforme a la legislación de dicho país. Las Partes Contratantes, en ningún caso asumirán los costos que implique la aplicación de la legislación de la otra Parte en relación con este artículo.

**Artículo 14°
ASIMILACIÓN DE LOS PERÍODOS DE APORTACIONES**

Si la legislación de una Parte Contratante subordina el otorgamiento de las prestaciones a la condición que el trabajador esté sometido a esa legislación en el momento en el cual se presenta la contingencia que da origen a la prestación, dicha condición se entenderá cumplida si, al verificarse esa contingencia, el trabajador está cotizando o percibe pensión en la otra Parte Contratante.

**Artículo 15°
CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ**

1. Para la determinación de la disminución de la capacidad de trabajo, para efectos de otorgamiento de las correspondientes pensiones de invalidez, la Institución Competente de cada una de las Partes Contratantes efectuará su evaluación de acuerdo con la legislación a la que está sometida. Los reconocimientos médicos necesarios serán efectuados y asumidos por la institución del lugar de residencia del interesado, a petición de la Institución Competente de la otra Parte Contratante.
2. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Institución Competente de la Parte Contratante en que resida el interesado pondrá a disposición de la Institución Competente de la otra Parte, a petición de ésta y gratuitamente, los informes y documentos médicos que obren en su poder.
3. En caso que una de las Partes Contratantes estime necesario que en la otra Parte Contratante se realicen exámenes médicos que sean de su exclusivo interés, éstos serán financiados por aquella Parte solicitante.

Artículo 16°
APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA

1. Los afiliados al Seguro General Obligatorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social financiarán sus pensiones en Ecuador con las cotizaciones del empleador y empleado conforme las Resoluciones emanadas por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
2. Para la concesión y cálculo de las pensiones en Ecuador se considerará lo establecido en la Ley 2001 — 055 de Seguridad Social; de su Reglamento General de aplicación y demás Resoluciones emanadas por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
3. La determinación del derecho a las pensiones se establecerá en la forma prevista en el párrafo anterior y, para efectos de su pago, el cálculo se hará con base a la proporción existente entre los periodos de seguro cumplidos exclusivamente en el Ecuador y en total de periodos de seguro registrados en ambas Partes Contratantes. En caso que la suma de los indicados periodos fuere superior al lapso exigido por las disposiciones legales para adquirir derecho a una pensión completa, los años en exceso no serán considerados para efectos de este cómputo.
4. La fijación de pensiones mínimas y máximas para efectos de este Convenio, será directamente proporcional al tiempo realmente cotizado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
5. En el caso de modificación a la normativa actual se aplicará la vigente en el momento de la concesión de la prestación.

Artículo 17°
APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN PERUANA

Sistema Nacional de Pensiones (SNP)

1. Las prestaciones que otorga el SNP son: pensión de jubilación, de invalidez, de sobrevivencia, esta última comprende viudez, orfandad y ascendiente.
2. La Institución Competente determinará el valor de la Prestación como si todos los periodos de seguro hubieran sido cumplidos conforme a su propia legislación y, para efectos del pago del beneficio calculará la parte de su cargo en base a la proporción existente entre los periodos de seguro cumplidos exclusivamente bajo esa legislación y el total de periodos de seguro exigidos por la legislación peruana.

Sistema Privado de Pensiones (SPP)

1. **Principio Rector.** Para efectos de determinar las condiciones y requisitos para el reconocimiento, operatividad y materialización de los beneficios otorgados en el ámbito del SPP resultarán de aplicación las disposiciones legales peruanas. La legislación peruana, con las particularidades establecidas en el presente

Convenio, será aplicable tanto para la totalización de periodos como para la totalización de recursos que hagan financierables las pensiones y beneficios.

2. Regímenes de pensión autogenerados. Los afiliados a una AFP, financiarán sus pensiones jubilatorias con el saldo acumulado en su cuenta individual de capitalización que, de ser el caso, incluye el Bono de Reconocimiento, el mismo que se otorgará en las condiciones que establezcan las disposiciones legales peruanas.
3. Regímenes de cobertura de invalidez, sobrevivencia y fallecimiento. En el caso de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, la pensión o beneficio, según corresponda, será igualmente financiada con el saldo acumulado en su cuenta individual de capitalización y capital para la pensión, en el marco del modelo de administración de riesgos que resulte aplicable, acorde a la legislación peruana, y con las particularidades establecidas en el presente Convenio.

TITULO V DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 18° PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, COMUNICACIONES O APELACIONES DENTRO DEL PLAZO

Las solicitudes, declaraciones, recursos y otros documentos que, para efectos de la aplicación de la legislación de una Parte Contratante, deban ser presentados en un *plazo determinado ante las Instituciones Competentes de esa Parte*, se considerarán como presentados ante ella, si se hubiesen presentado dentro del mismo plazo ante la Institución Competente de la otra Parte Contratante.

Artículo 19° ASISTENCIA RECÍPROCA

1. Para la aplicación de este Convenio las Autoridades Competentes, los Organismos de Enlace y las Instituciones Competentes de las Partes Contratantes se prestarán asistencia recíproca tal como si se tratara de la aplicación de su propia legislación. Dicha asistencia será gratuita.
2. Las Autoridades, Organismos de Enlace e Instituciones Competentes de las dos Partes Contratantes podrán comunicarse directamente entre sí y con las personas interesadas. También podrán, si fuere necesario, comunicarse a través de canales diplomáticos y consulares.
3. Las autoridades diplomáticas y consulares de las Partes Contratantes podrán representar a sus propios nacionales ante las Autoridades Competentes, Organismos de Enlace o Instituciones Competentes en materias de Seguridad Social de la otra Parte Contratante, a petición expresa de los interesados, únicamente para agilizar cualquier trámite o el otorgamiento de los beneficios, representación que no incluye el pago del mismo a esa autoridad.

Artículo 20°
IDIOMA QUE SE UTILIZARÁ EN EL CONVENIO

En la aplicación del presente Convenio las Autoridades Competentes, Organismos de Enlace e Instituciones Competentes usarán el idioma castellano.

Artículo 21°
PROTECCIÓN E INFORMACIÓN

Toda información relativa a una persona, que se remita de una Parte Contratante a la otra, en virtud del presente Convenio, sólo se utilizará para la aplicación del mismo, quedando amparada dicha información por el principio de protección a la privacidad y confidencialidad de la vida privada, en los términos establecidos por la legislación interna correspondiente.

Artículo 22°
**EXENCIÓN DE IMPUESTOS Y DE
LEGALIZACIÓN**

Todos los actos, documentos, gestiones y escritos relacionados a la aplicación del Convenio y de los instrumentos adicionales, quedan exentos de la obligación de expedir constancias, así como el visado o legalización por parte de las autoridades diplomáticas o consulares, bastando la certificación de la Institución Competente.

Artículo 23°
MONEDA, FORMA DE PAGO Y DISPOSICIONES RELATIVAS A DIVISAS

1. Los pagos que procedan en virtud de este Convenio se efectuarán en la moneda de la Parte Contratante que efectúe el pago, conforme lo establezca la legislación de cada Parte Contratante, incluyendo la fecha y forma de pago de la pensión.
2. En caso de que una de las Partes Contratantes imponga restricciones sobre divisas, ambas Partes Contratantes acordarán, sin dilación, las medidas que sean necesarias para asegurar las transferencias en los territorios de ambas Partes Contratantes, respecto de cualquier suma que deba pagarse en conformidad con el presente Convenio.

Artículo 24°
ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Las Autoridades Competentes de las Partes Contratantes deberán:

- a) Establecer los Acuerdos Administrativos necesarios para la mejor aplicación del presente Convenio;
- b) Designar los respectivos Organismos de Enlace, quienes podrán establecer los Acuerdos Administrativos Complementarios necesarios para la mejor aplicación del presente Convenio;
- c) Comunicar las medidas adoptadas en el plano interno para la aplicación del presente Convenio;
- d) Notificar toda modificación de la legislación indicada en el Artículo 2°;
- e) Prestar sus buenos oficios y la más amplia colaboración técnica y administrativa posible para la mejor aplicación de este Convenio.

Artículo 25°
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia acerca de la interpretación o aplicación de este Convenio, y demás instrumentos adicionales que se suscriban, se resolverá mediante negociaciones entre las Autoridades Competentes u Organismos de Enlace de las Partes Contratantes, según corresponda.

TÍTULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 26°
CÓMPUTO DE PERÍODOS ANTERIORES A LA VIGENCIA DEL CONVENIO

1. Los períodos de seguro cumplidos según la legislación de una Parte Contratante antes de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, serán tomados en consideración para la determinación del derecho a las prestaciones que se reconozcan en virtud del mismo.
2. Lo dispuesto precedentemente no modifica las normas sobre prescripción y caducidad vigentes en la legislación de cada una de las Partes Contratantes.

TÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 27°
DURACIÓN DEL CONVENIO

1. El presente Convenio se celebra por tiempo indefinido. Podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes Contratantes. La denuncia deberá ser notificada por vía diplomática produciéndose el término del Convenio, transcurridos doce (12) meses contados desde la fecha de la denuncia.
2. En caso de denuncia, las disposiciones del presente Convenio continuarán aplicándose a los derechos ya reconocidos, no obstante las disposiciones restrictivas que la legislación de cualquiera de las Partes Contratantes pueda prever para los casos de residencia en el extranjero de un beneficiario.
3. Las Partes Contratantes establecerán un acuerdo especial para garantizar los derechos en curso de adquisición derivados de los períodos de seguro equivalentes, cumplidos con anterioridad a la fecha de término de la vigencia del Convenio.

Artículo 28°
FIRMA Y APROBACIÓN DEL CONVENIO

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de recepción de la segunda notificación por la cual las Partes Contratantes se comuniquen mediante la vía diplomática el cumplimiento de sus requisitos internos para la entrada en vigor y reconocerá los derechos amparados en el Convenio desde la fecha de su vigencia y tendrá la misma duración.

En fe de lo cual, los representantes debidamente autorizados firman el presente Convenio.

Hecho en la ciudad de Lima, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil once, en duplicado, siendo los dos textos igualmente auténticos.



Por la República del Perú



Por la República del Ecuador

[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY CONCLUDED BETWEEN THE REPUBLIC
OF PERU AND THE REPUBLIC OF ECUADOR

The Republic of Peru and the Republic of Ecuador, hereinafter referred to as “the Contracting Parties”, desiring to regulate their relations in the field of social security, have agreed as follows:

Part I. General provisions

Article 1. Definitions

“The purpose of the present Agreement is to protect the nationals and persons referred to in article 3 of the Agreement, and to preserve social security rights that have been acquired or are in the process of being acquired, on the basis of the principles of equality, mutual respect for sovereignty, and reciprocity of advantage, in accordance with each Contracting Party’s domestic laws, the provisions of the present Agreement and its corresponding administrative arrangement.”

1. For the purposes of the present Agreement:

(a) “Laws” means the laws, regulations and provisions relating to contributions, pensions or benefits in the social security systems referred to in article 2 of this Agreement;

(b) “Competent authority” means, in relation to Peru, the Ministry of Economic Affairs and Finance and the Ministry of Labour and Promotion of Employment, and, in relation to Ecuador, the Ecuadorian Social Security Institute;

(c) “Liaison agency” means the agency responsible for coordinating between the competent agencies in order to facilitate the application of the Agreement, as well as for informing the interested parties of the rights and obligations arising therefrom;

(d) “Competent agency” means, in relation to Ecuador, the Ecuadorean Social Security Institute, and, in relation to Peru, the agency responsible, under Peruvian laws, for the application of the laws specified in article 2 of the present Agreement;

(e) “Pension” means a cash benefit, including supplements, allowances and increases;

(f) “Period of coverage” means a period of contribution recognized as such in the laws under which it was completed, as well as any other period recognized as equivalent to a period of coverage under those laws;

(g) “Worker” means any person who performs an employed or self-employed economic activity and is or has been subject to the laws referred to in article 2;

(h) “Employed person” means a person who is in the service of an employer in a subordinate and dependent relationship, in accordance with the applicable laws;

(i) “Self-employed person” means a person who, in accordance with the applicable laws, performs, on a self-employed basis, an activity from which he or she receives income;

(j) “Affiliate or insured person” means an employed or self-employed person participating in a social security system of either of the Contracting Parties;

(k) “Recognition bond” means, in relation to Peru, securities denominated in cash and subject to a redemption condition which, under Peruvian laws, represents the periods in which a

person made contributions to the national pension system prior to joining s a pension fund administrator's system.

(l) "Compulsory contributions" means contributions that employers, workers and/or the State are required to make to the appropriate pension systems;

(m) "State-guaranteed pension" means, in relation to Peru, the benefit granted by the State to participants who, before joining the individual capitalization system, contributed to the Peruvian pay-as-you-go system, in accordance with existing Peruvian laws.

2. Other terms or expressions used in this Agreement have the meaning assigned to them in the applicable laws of each country.

Article 2. Material scope

1. The present Agreement shall apply:

A. In relation to Peru, to the laws concerning:

(I) The national pension system, administered by the Office of Social Security Standardization, specifically with regard to disability, retirement and survivors' pensions;

(II) The private pension fund administration system, supervised by the Office of the Superintendent of Banks, Insurance and Pension Fund Administrators, specifically with regard to benefits such as retirement, disability and survivors' benefits, funeral expenses, and any other benefits established under Peruvian laws;

(III) Health benefit schemes under EsSALUD.

B. In relation to Ecuador, to:

I) The Social Security Act and other relevant provisions.

2. The present Agreement shall also apply to future legal provisions supplementing or amending those mentioned in the preceding paragraph, unless the competent authority of one Party informs the other of an exception within six months of notification of such laws, regulations or provisions.

3. The scope of the present Agreement includes provisions of other bilateral or multilateral agreements entered into by either of the Contracting Parties, including Decision No. 583 of the Andean Community, in accordance with the Constitution of the Republic of Ecuador and the Political Constitution of Peru.

Article 3. Personal scope

The present Agreement shall apply to:

(a) Nationals of the two Contracting Parties who are or have been subject to the laws referred to in article 2 of the present Agreement;

(b) Nationals of a third country who are or have been subject to the laws of one or both Contracting Parties; and

(c) Persons deriving their rights from the persons referred to in points (a) and (b) above.

Part II

General applicable principles

Article 4. Equality of treatment

The persons referred to in article 3 shall be subject to the obligations and entitled to the benefits provided for in the laws of each of the Contracting Parties under the same conditions as the nationals of that Party.

Article 5. Export of pensions

1. Disability, old-age and survivors' pensions paid under the laws of one Contracting Party may not be reduced, modified, suspended or withheld on the ground that the beneficiary is staying or residing in the territory of the other Party.

2. The pensions referred to in the preceding paragraph, where owed by one Contracting Party to nationals of the other Contracting Party residing in a third country, shall be paid under the same conditions and for the same period of time as those paid to nationals of the first Contracting Party residing in that third country.

Article 6. Aggregation of periods of coverage

1. Where, under the laws of one Contracting Party, the acquisition, retention or recovery of the entitlement to old-age, disability or survivors' pensions is conditional on the completion of certain periods of coverage, periods of coverage completed under the laws of the other Contracting Party shall be added, as necessary, to periods of coverage completed under the laws of the first Contracting Party, provided that they do not overlap.

2. Where it is not possible to determine when certain periods of coverage were completed under the laws of one Contracting Party, it shall be presumed that such periods do not overlap with periods of coverage completed under the laws of the other Contracting Party.

3. The periods in question shall be calculated in accordance with the laws of the Contracting Party in which the relevant services were performed.

4. The competent agency shall determine, in accordance with its laws and taking into account the aggregated periods of coverage, whether the interested person meets the necessary conditions for entitlement to a pension. If those conditions are met, the competent agency shall determine the amount of the benefits to which the individual would be entitled if all the aggregated periods had been completed under its own laws, and shall establish that amount in proportion to the periods completed exclusively under those laws.

5. The entitlement to pensions of persons who, taking into account the aggregated periods of coverage, do not meet the conditions set out in the laws of the two Contracting Parties, shall be determined in accordance with the laws of each Party, as and when those conditions are fulfilled.

Part III. Provisions concerning the applicable laws

Article 7

The workers referred to in article 3 of the present Agreement shall be subject to the laws of the Contracting Party in whose territory they work or have worked, irrespective of the States in which they legally reside or in which their employers are headquartered.

Article 8. Special rules: Workers assigned abroad

Workers who work in the territory of one Contracting Party and are assigned to the territory of the other Party for a limited period of time shall remain subject to the laws of the first Party, provided that the duration of the stay does not exceed three months. If that time limit is exceeded, the employee may remain subject to those laws, with the agreement of the competent authority of the receiving Contracting Party or a designated representative.

Article 9. State employees and diplomatic and consular personnel

1. This Agreement shall not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 or the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963.

2. Public officials sent by one Contracting Party to the territory of the other Contracting Party shall remain subject to the laws of the first Party, without time limit.

3. Nationals of one Contracting Party serving as personnel in diplomatic missions or consular offices of that Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall be subject to the laws of the first Contracting Party.

4. Without prejudice to the provisions of paragraph 1 above, nationals of one Contracting Party who are employed in the territory of the other Party in the service of a diplomatic mission or consular office of the first Party shall be subject to the laws of the second Contracting Party, unless, within a period of six months of the date on which they begin their service or of the entry into force of the present Agreement, they choose to be subject to the laws of the first Contracting Party.

5. Without prejudice to the provisions of paragraph 1, the provisions of paragraphs 2 and 3 of this article shall apply to service personnel employed by:

- (a) A diplomatic mission or consular office;
- (b) Diplomatic personnel;
- (c) Consular officials; and

(d) The administrative and/or technical personnel of the diplomatic mission or consular office.

Article 10. Workers on board a ship or aircraft

1. Persons employed on board a ship shall be subject to the laws of the State whose flag the ship is flying. Persons employed in the loading, unloading or repair of ships, surveillance or other services in a port shall be subject to the laws of the country to whose territory the port belongs.

2. Itinerant personnel of air transport companies operating in both Contracting Parties shall be subject to the laws of the country in which the company has its main office. However, if such personnel reside in the territory of the other Contracting Party, they shall be subject to the laws of that other Contracting Party.

Article 11. Exceptions to the provisions of articles 8 to 10

At the request of the worker and the employer, the competent authorities of both Contracting Parties or the agencies designated by them may, by common accord, allow exceptions to the provisions of articles 8 to 10 for certain persons or categories of persons.

Part IV. Provisions concerning benefits

Article 12. Periods of coverage shorter than one year

The competent agencies of the Contracting Parties which grant pensions shall only grant benefits if the periods of coverage completed under the applicable laws add up to at least one year, unless those periods alone confer an entitlement to a benefit under those laws.

Article 13. Health benefits for persons receiving pensions

Persons who reside in the territory of one Contracting Party and receive pensions under the laws of the other Contracting Party shall be entitled to in-kind health benefits in the case of emergencies and illnesses included in the basic coverage provided in each country, in accordance with the laws of the other Contracting Party, under the same conditions as persons receiving similar benefits under the laws of that country. Under no circumstances shall either Contracting Party bear the costs generated by the application of the laws of the other Party in connection with this article.

Article 14. Treatment of periods of contribution as equivalent

If, under the laws of one Contracting Party, the granting of benefits is conditional on the worker having been subject to those laws when the incident giving rise to the benefit occurred, that condition shall be considered to have been fulfilled if, when the incident occurred, the worker was contributing to or receiving a pension in the other Contracting Party.

Article 15. Determination of disability

1. In order to determine a decline in the ability to work with a view to granting appropriate disability pensions, the competent agency of each Contracting Party shall carry out its evaluation in accordance with the applicable laws. The necessary medical examinations shall be carried out and the related costs borne by the agency of the place of residence of the interested person, at the request of the competent agency of the other Contracting Party.

2. For the purposes of the preceding paragraph, the competent agency of the Contracting Party in which the interested person resides shall make available to the competent agency of the other Party, at the latter's request and free of charge, the medical reports and documents in its possession.

3. If one of the Contracting Parties deems it necessary that medical examinations in its sole interest be carried out in the other Contracting Party, those examinations shall be financed by that requesting Party.

Article 16. Application of Ecuadorian laws

1. Persons enrolled in the compulsory general insurance scheme of the Ecuadorian Social Security Institute shall finance their pensions in Ecuador with employer and employee contributions, in accordance with the decisions issued by the Executive Committee of the Ecuadorian Social Security Institute.

2. Social Security Act No. 2001-055, its general implementing regulation and decisions issued by the Executive Committee of the Ecuadorian Social Security Institute shall be taken into account in granting and calculating pensions in Ecuador.

3. Entitlement to pensions shall be determined in the manner provided for in the preceding paragraph and the amounts to be paid shall be calculated on the basis of the ratio between the periods of coverage completed exclusively in Ecuador and the total recognized periods of coverage in both Contracting Parties. If the total recognized periods of coverage in both Contracting Parties amount to more than the period required under Ecuadorian laws for entitlement to a full pension, the excess years shall not be taken into account in this calculation.

4. For the purposes of this Agreement, minimum and maximum pensions shall be established in proportion to the actual period of contribution to the Ecuadorian Social Security Institute.

5. In the event of amendments to current laws, the laws in force at the time that the benefit was granted shall apply.

Article 17. Application of Peruvian laws

National pension system

1. The benefits granted under the national pension system are retirement, disability and survivors' pensions, the latter of which include pensions for widows, orphans and ascendants.

2. The competent agency shall determine the amount of the benefit in the same manner as if all periods of coverage had been completed under its own laws and shall calculate the share that it owes on the basis of the ratio between the periods of coverage completed exclusively under those laws and the total periods of coverage required under Peruvian laws.

Private pension system

1. Guiding principle: For the purposes of determining the conditions and requirements for the recognition, operation and payment of the benefits granted under the private pension system, Peruvian legal provisions shall apply. Peruvian laws, with the specifics set out in this Agreement, shall apply both to the aggregation of periods and to the aggregation of resources to enable the funding of pensions and benefits.

2. Self-generated pension schemes. Persons affiliated with pension fund administrator's scheme shall finance their retirement pensions out of the accumulated balance in their individual capitalization accounts which, if applicable, include the recognition bonds, which shall be granted under the conditions established under Peruvian laws.

3. Schemes for disability coverage, survivors' and death benefits: In the case of disability pensions, survivors' benefits and funeral expenses, the relevant pension or benefit shall also be funded out of the accumulated balance in their individual capitalization accounts, under the

applicable risk management model and in accordance with Peruvian laws and the specifics set out in the present Agreement.

Part V. Miscellaneous provisions

Article 18. Timely submission of claims, notices or appeals

Any claims, notices, appeals and other documents which, under the laws of one Contracting Party, must be submitted to the competent agencies of that Party within a specified period, shall be considered to have been submitted to that Party if they were submitted to the competent agency of the other Contracting Party within that time frame.

Article 19. Mutual assistance

1. For the implementation of this Agreement, the competent authorities, liaison agencies and competent agencies of the Contracting Parties shall assist each other as they would for the purposes of applying their own laws. Such assistance shall be free of charge.

2. The competent authorities, liaison agencies and agencies of the two Contracting Parties may communicate directly with each other and with interested persons. They may also, if necessary, communicate through diplomatic and consular channels.

3. The diplomatic and consular authorities of the Contracting Parties may represent their own nationals before the competent authorities, liaison agencies or competent agencies of the other Contracting Party in social security matters, at the express request of the interested persons, only in order to expedite relevant procedures or the granting of benefits. Such representation does not include payment of related expenses to that authority.

Article 20. Language to be used in implementing the Agreement

For the implementation of the present Agreement, the competent authorities, liaison agencies and competent agencies shall use the Spanish language.

Article 21. Protection of information

Any personal information transmitted from one Contracting Party to the other, pursuant to the present Agreement, shall be used only for the purpose of implementing the Agreement and shall be protected in accordance with the principle of protection of privacy and confidentiality of private life, under the terms set out in the relevant domestic laws.

Article 22. Exemption from taxes and the requirement of authentication

All instruments, documents, arrangements and writings relating to the implementation of the Agreement and any additional instruments shall be exempt from attestation requirements and the requirement of certification or authentication by diplomatic or consular authorities; certification by the competent agency shall suffice.

Article 23. Currency, means of payment and provisions relating to foreign currency

1. Payments under this Agreement shall be made in the currency of the Contracting Party making the payment, in accordance with the laws of each Contracting Party, and on the date and by the means established under those laws.

2. If one of the Contracting Parties imposes restrictions on foreign currency, both Contracting Parties shall agree, without delay, on the necessary measures to ensure transfers to the territories of both Contracting Parties of any sums payable in accordance with the present Agreement.

Article 24. Responsibilities of the competent authorities

The competent authorities of the Contracting Parties shall:

(a) Establish the administrative arrangements necessary for the effective implementation of the present Agreement;

(b) Designate liaison agencies, which may establish additional administrative arrangements necessary for the effective implementation of the present Agreement;

(c) Communicate the measures adopted at the domestic level for the implementation of the present Agreement;

(d) Provide notification of any changes to the laws referred to in article 2;

(e) Offer their good offices and the broadest possible technical and administrative assistance for the effective implementation of this Agreement.

Article 25. Settlement of disputes

Any dispute over the interpretation or implementation of this Agreement and any additional instruments that may be signed shall be settled through negotiations between the competent authorities or liaison agencies of the Contracting Parties, as appropriate.

Part VI. Transitional provisions

Article 26. Calculation of periods prior to the entry into force of the Agreement

1. Periods of coverage completed under the laws of one of the Contracting Parties prior to the date on which the present Agreement enters into force shall be taken into consideration in determining entitlement to the benefits recognized under the Agreement.

2. The foregoing does not alter the applicable rules on prescription and forfeiture under the laws of each of the Contracting Parties.

Part VII. Final provisions

Article 27. Duration of the Agreement

1. The present Agreement is concluded for an indefinite period. It may be denounced by either of the Contracting Parties. Notification of such denunciation shall be provided through the

diplomatic channel, and the Agreement shall cease to have effect twelve (12) months after the date of denunciation.

2. In the event of denunciation, the provisions of the present Agreement shall continue to apply to rights already recognized, notwithstanding any restrictive provisions under the laws of either Contracting Party regarding cases of beneficiaries residing abroad.

3. The Contracting Parties shall enter into a special agreement to guarantee any rights in the process of being acquired which are derived from equivalent periods of coverage completed prior to the date of termination of the Agreement.

Article 28. Signature and adoption of the Agreement

The present Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second notification by which the Contracting Parties inform each other through the diplomatic channel that their internal requirements for its entry into force have been fulfilled, shall recognize the rights covered under the Agreement since the date of its entry into force, and shall have the same duration.

IN WITNESS WHEREOF, the duly authorized representatives have signed the present Agreement.

DONE at the city of Lima on 22 July 2011, in duplicate, both texts being equally authentic.

For the Republic of Peru

[SIGNED]

For the Republic of Ecuador

[SIGNED]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE CONCLU ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU ET LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR

La République du Pérou et la République de l'Équateur, ci-après dénommées « les Parties contractantes », désireuses de régler leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenues de ce qui suit :

Titre I. Dispositions générales

Article 1. Définitions

« Le présent Accord a pour objet de protéger les ressortissants et les personnes visées à l'article 3 de l'Accord, et de préserver les droits en matière de sécurité sociale acquis ou en cours d'acquisition, sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel de la souveraineté et de réciprocité des avantages, conformément à la législation interne de chaque Partie contractante, aux dispositions du présent Accord et à son arrangement administratif correspondant. »

1. Aux fins du présent Accord :

a) Le terme « législation » désigne les lois, règlements et dispositions relatifs aux cotisations, pensions ou prestations des systèmes de sécurité sociale visés à l'article 2 du présent Accord ;

b) Le terme « autorité compétente » désigne, en ce qui concerne le Pérou, le Ministère de l'économie et des finances et le Ministère du travail et de la promotion de l'emploi et, en ce qui concerne l'Équateur, l'Institut équatorien de sécurité sociale ;

c) Le terme « organisme de liaison » désigne l'organisme chargé de la coordination entre les organismes compétents en vue de faciliter l'application du présent Accord ainsi que d'informer les personnes intéressées sur les droits et obligations qui en découlent ;

d) Le terme « organisme compétent » désigne, en ce qui concerne l'Équateur, l'Institut équatorien de sécurité sociale et, en ce qui concerne le Pérou, l'organisme chargé, en vertu de la législation péruvienne, de l'application des lois visées à l'article 2 du présent Accord ;

e) Le terme « pension » désigne une prestation en espèces, y compris les suppléments, allocations et majorations ;

f) Le terme « périodes d'assurance » désigne une période de contribution reconnue comme telle par la législation sous laquelle elle a été accomplie, ainsi que toute autre période reconnue comme équivalente à une période d'assurance en vertu de cette législation ;

g) Le terme « travailleur » désigne toute personne qui exerce une activité économique salariée ou indépendante et qui est ou a été soumise à la législation visée à l'article 2 ;

h) Le terme « personne employée » désigne une personne qui est au service d'un employeur dans une relation de subordination et de dépendance, conformément à la législation applicable ;

i) Le terme « travailleur indépendant » désigne une personne qui, conformément à la législation applicable, exerce, à titre indépendant, une activité dont elle tire un revenu ;

j) Le terme « personne affiliée ou assurée » désigne un travailleur, salarié ou non, participant à un système de sécurité sociale de l'une des Parties contractantes ;

k) Le terme « bon de reconnaissance » désigne, dans le cas du Pérou, les titres monétaires soumis à une condition de remboursement qui, conformément aux lois péruviennes, correspondent aux périodes de cotisation effectuées dans le système de pensions national péruvien de rejoindre le système d'un administrateur de caisse de pensions ;

l) Le terme « cotisations obligatoires » désigne les cotisations que les employeurs, les travailleurs ou l'État sont tenus de verser aux systèmes de pension appropriés ;

m) Le terme « retraite avec garantie de l'État » désigne, dans le cas du Pérou, la prestation accordée par l'État aux personnes qui, avant d'être affiliées au système de capitalisation individuelle, ont cotisé au système de répartition péruvien, conformément à la législation péruvienne en vigueur ;

2. Les autres termes utilisés dans le présent Accord ont la signification qui leur est donnée en vertu de la législation applicable de chaque pays.

Article 2. Champ d'application matériel

1. Le présent Accord s'applique :

A. En ce qui concerne le Pérou, à la législation relative :

(I) au système national de pensions, géré par l'Office de normalisation de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les pensions d'invalidité, de retraite et de survivants ;

(II) au système d'administration des fonds de pension privés, supervisé par le Bureau du surintendant des banques, des assurances et des administrateurs de fonds de pension, notamment en ce qui concerne les prestations telles que la retraite, les prestations d'invalidité et de survivants, les frais funéraires et toute autre prestation établie par la législation péruvienne ;

(III) aux régimes de prestations de santé dans le cadre d'EsSALUD.

B. En ce qui concerne l'Équateur :

I) à la loi sur la sécurité sociale et les autres dispositions pertinentes.

2. Le présent Accord s'applique également aux dispositions légales futures complétant ou modifiant celles mentionnées au paragraphe précédent, sauf si l'autorité compétente d'une Partie informe l'autre d'une exception dans un délai de six mois à compter de la notification de ces lois, règlements ou dispositions.

3. Le champ d'application du présent Accord comprend les dispositions d'autres accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par l'une ou l'autre des Parties contractantes, y compris la décision n° 583 de la Communauté andine, conformément à la Constitution de la République de l'Équateur et à la Constitution politique du Pérou.

Article 3. Champ d'application personnel

Le présent Accord s'applique :

a) Aux ressortissants des deux Parties contractantes qui sont ou ont été soumis à la législation visée à l'article 2 du présent Accord ;

b) Aux ressortissants d'un pays tiers qui sont ou ont été soumis à la législation de l'une ou des deux Parties contractantes ;

c) Aux personnes qui tirent leurs droits des personnes visées aux points a) et b) ci-dessus.

Titre II. Principes généraux applicables

Article 4. Égalité de traitement

Les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice prévu par la législation de chacune des Parties contractantes dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.

Article 5. Export de pensions

1. Les pensions de vieillesse, d'invalidité ou de survivants acquises au titre de la législation d'une Partie contractante ne peuvent être réduites, modifiées, suspendues ou retenues du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Partie contractante.

2. Les pensions visées au paragraphe précédent, lorsqu'elles sont dues par une Partie contractante à des ressortissants de l'autre Partie contractante résidant dans un pays tiers, sont versées dans les mêmes conditions et pour la même durée que celles versées aux ressortissants de la première Partie contractante résidant dans ce pays tiers.

Article 6. Totalisation des périodes d'assurance

1. Lorsque, en application de la législation d'une Partie contractante, l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à une pension de vieillesse, d'invalidité ou de survivant est subordonné à l'accomplissement de certaines périodes d'assurance, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie contractante sont ajoutées, selon que de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie contractante, pour autant qu'elles ne se chevauchent pas.

2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer quand certaines périodes d'assurance ont été accomplies au titre de la législation de l'une des Parties contractantes, il est présumé que ces périodes ne coïncident pas avec les périodes d'assurance accomplies au titre de la législation de l'autre Partie contractante.

3. Les périodes en question sont calculées conformément à la législation de la Partie contractante dans laquelle les services en question ont été effectués.

4. L'organisme compétent détermine, conformément à sa législation et en tenant compte des périodes d'assurance cumulées, si la personne concernée remplit les conditions nécessaires pour avoir droit à une pension. Dans l'affirmative, l'organisme compétent calcule le montant de la prestation auquel la personne concernée aurait droit comme si toutes les périodes totalisées avaient été accomplies conformément à la législation de la Partie dont elle relève et fixe le montant sur la base des périodes accomplies exclusivement conformément à cette législation.

5. Le droit à pension des personnes qui, compte tenu des périodes d'assurance cumulées, ne remplissent pas les conditions prévues par la législation des deux Parties contractantes, est déterminé conformément à la législation de chaque Partie, au fur et à mesure que ces conditions sont remplies.

Titre III. Dispositions déterminant la législation applicable

Article 7.

Les travailleurs visés à l'article 3 du présent Accord sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils travaillent ou ont travaillé, quels que soient les États dans lesquels ils résident légalement ou dans lesquels leurs employeurs ont leur siège.

Article 8. Règles particulières : travailleurs affectés à l'étranger

Les travailleurs qui exercent une activité sur le territoire d'une Partie contractante et qui sont détachés sur le territoire de l'autre Partie contractante pendant une durée limitée demeurent soumis à la législation de la première Partie, à condition que la durée de leur séjour n'excède pas trois mois. Si ce délai est dépassé, ils peuvent rester soumis à ces lois, avec l'accord de l'autorité compétente de la Partie contractante d'accueil ou d'un(e) représentant(e) désigné(e).

Article 9. Agents de l'État et personnel diplomatique et consulaire

1. Le présent Accord ne peut porter atteinte aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ni aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.

2. Les agents publics envoyés par une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante restent soumis à la législation de la première Partie, sans limitation de durée.

3. Les ressortissants d'une Partie contractante qui exercent des fonctions dans les missions diplomatiques ou consulaires de cette Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante sont soumis à la législation de la première Partie contractante.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les ressortissants d'une Partie contractante qui sont employés sur le territoire de l'autre Partie au service d'une mission diplomatique ou d'un bureau consulaire de la première Partie sont soumis aux lois de la seconde Partie contractante, à moins que, dans un délai de six mois à compter de la date de leur entrée en service ou de l'entrée en vigueur du présent Accord, ils ne choisissent d'être soumis aux lois de la première Partie contractante.

5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article s'appliquent aux membres du personnel employés par :

- a) une mission diplomatique ou un bureau consulaire ;
- b) des membres du personnel diplomatique ;
- c) des agents consulaires ;
- d) le personnel administratif ou technique de la mission diplomatique ou du bureau consulaire.

Article 10. Travailleurs à bord d'un navire ou d'un avion

1. Les personnes employées à bord d'un navire sont soumises aux lois de l'État dont le navire bat le pavillon. Les personnes employées au chargement, au déchargement ou à la réparation des navires, à la surveillance ou à d'autres services dans un port sont soumises aux lois du pays au territoire duquel le port appartient.

2. Le personnel itinérant des entreprises de transport aérien opérant dans les deux Parties contractantes est soumis à la législation du pays dans lequel l'entreprise a son siège principal. Toutefois, si ce personnel réside sur le territoire de l'autre Partie contractante, elle est soumise uniquement à la législation de cette Partie contractante.

Article 11. Exceptions aux dispositions des articles 8 à 10

À la demande du travailleur ou de l'employeur, les autorités compétentes des Parties contractantes ou les organismes désignés par celles-ci peuvent, d'un commun accord, prévoir des exceptions aux dispositions des articles 8 à 10 pour certaines personnes ou catégories de personnes.

Titre IV. Dispositions relatives aux prestations

Article 12. Périodes d'assurance inférieures à une année

Les organismes compétents des Parties contractantes qui accordent des pensions n'accordent des prestations que si les périodes d'assurance accomplies sous la législation applicable totalisent au moins une année, à moins que ces périodes ne donnent droit à une prestation en vertu de ladite législation.

Article 13. Prestations de santé pour les personnes bénéficiant d'une pension

Les personnes qui résident sur le territoire d'une Partie contractante et qui perçoivent des pensions en vertu de la législation de l'autre Partie contractante ont droit à des prestations de santé en nature en cas d'urgences et de maladies incluses dans la couverture de base prévue dans chaque pays, conformément à la législation de l'autre Partie contractante, dans les mêmes conditions que les personnes bénéficiant de prestations similaires en vertu de la législation de ce pays. En aucun cas l'une ou l'autre des Parties contractantes ne supportera les coûts générés par l'application des lois de l'autre Partie en relation avec le présent article.

Article 14. Traitement des périodes de cotisation comme équivalentes

Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, l'octroi des prestations est subordonné à la condition que le travailleur ait été soumis à cette législation au moment de la survenance de l'événement donnant droit à la prestation, cette condition est considérée comme remplie si, au moment de la survenance de l'événement, le travailleur cotisait à une pension ou en bénéficiait dans l'autre Partie contractante.

Article 15. Détermination de l'invalidité

1. Pour déterminer la réduction de la capacité de travail aux fins d'octroi des pensions d'invalidité, l'organisme compétent de chacune des Parties contractantes effectue son évaluation conformément à la législation qu'elle applique. Les examens médicaux nécessaires sont effectués et les frais y afférents supportés par l'organisme du lieu de résidence de la personne intéressée, à la demande de l'organisme compétent de l'autre Partie contractante.

2. Aux fins d'application du paragraphe précédent, l'organisme compétent de la Partie contractante dans laquelle réside la personne concernée met à disposition de l'organisme compétent de l'autre Partie, à la demande de celui-ci et gratuitement, les rapports et documents médicaux qu'il a en sa possession.

3. Si l'une des Parties contractantes estime nécessaire dans son seul intérêt que des examens médicaux soient effectués dans l'autre Partie contractante, ces examens sont financés par la Partie requérante.

Article 16. Application de la législation équatorienne

1. Les personnes inscrites au régime d'assurance générale obligatoire de l'Institut équatorien de sécurité sociale financent leurs pensions en Équateur au moyen de cotisations patronales et salariales, conformément aux décisions du comité exécutif de l'Institut équatorien de sécurité sociale.

2. La loi sur la sécurité sociale n° 2001-055, son règlement général d'application et les décisions du comité exécutif de l'Institut équatorien de sécurité sociale sont pris en compte pour l'octroi et le calcul des pensions en Équateur.

3. Le droit à pension est déterminé selon les modalités prévues au paragraphe précédent et les montants à verser sont calculés sur la base du rapport entre les périodes d'assurance accomplies exclusivement en Équateur et le total des périodes d'assurance reconnues dans les deux Parties contractantes. Si le total des périodes d'assurance reconnues dans les deux Parties contractantes est supérieur à la période requise par les lois équatoriennes pour avoir droit à une pension complète, les années excédentaires ne sont pas prises en compte dans ce calcul.

4. Aux fins du présent Accord, les pensions minimales et maximales sont établies proportionnellement à la durée effective de cotisation à l'Institut équatorien de sécurité sociale.

5. En cas de modification de la législation en vigueur, c'est la législation en vigueur au moment de l'octroi de la prestation qui s'applique.

Article 17. Application de la législation péruvienne

Régime des pensions national

1. Les prestations accordées dans le cadre du système national de retraite sont les pensions de retraite, d'invalidité et de survivants, ces dernières comprenant les pensions pour les veuves, les orphelins et les ascendants.

2. L'organisme compétent détermine le montant de la prestation de la même manière que si toutes les périodes de couverture avaient été accomplies sous sa propre législation et calcule la part qu'il doit en fonction du rapport entre les périodes de couverture accomplies exclusivement sous cette législation et le total des périodes de couverture requises par la législation péruvienne.

Régime des pensions privé

1. Principe directeur : en vue de déterminer les conditions et exigences en matière de reconnaissance, d'application et de versement des prestations accordées dans le système de retraite privé péruvien, les dispositions législatives péruviennes sont applicables. La législation péruvienne, de même que les dispositions énoncées dans le présent Accord administratif, sont

applicables pour la totalisation des périodes ainsi que pour la totalisation des ressources qui permettent le financement des retraites et des prestations.

2. Régimes de retraite auto-produits. Les personnes affiliées à une société de gestion des caisses de retraite financent leur retraite avec le solde cumulé sur leur compte individuel de capitalisation qui, le cas échéant, comprend le bon de reconnaissance accordé dans les conditions fixées par la législation péruvienne.

3. Régimes de couverture d'invalidité, de survivants et de décès : dans le cas des pensions d'invalidité, des prestations de survivants et des frais funéraires, la pension ou la prestation correspondante sera également financée par le solde accumulé dans leurs comptes de capitalisation individuels, dans le cadre du modèle de gestion des risques applicable et conformément à la législation péruvienne et aux spécificités énoncées dans le présent Accord.

Titre V. Dispositions diverses

Article 18. Présentation des demandes, notifications et appels dans les délais

Les réclamations, avis, recours et autres documents qui, en vertu de la législation d'une Partie contractante, doivent être soumis aux organismes compétents de cette Partie dans un délai déterminé, sont considérés comme ayant été soumis à cette Partie s'ils ont été soumis à l'organisme compétent de l'autre Partie contractante dans ce délai.

Article 19. Assistance mutuelle

1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes, les organismes de liaison et les institutions compétentes des Parties contractantes se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. Cette assistance est gratuite.

2. Les autorités compétentes, les organismes de liaison et les organismes des deux Parties contractantes peuvent communiquer directement entre eux et avec les personnes intéressées. Ils peuvent également, si nécessaire, communiquer par les voies diplomatiques et consulaires.

3. Les autorités diplomatiques et consulaires des Parties contractantes peuvent représenter leurs propres ressortissants auprès des autorités compétentes, des organismes de liaison ou des organismes compétents de l'autre Partie contractante en matière de sécurité sociale, à la demande expresse des intéressés, uniquement en vue d'accélérer les procédures y afférentes ou l'octroi des prestations. Cette représentation ne comprend pas le paiement des frais connexes à cette autorité.

Article 20. Langue à utiliser pour la mise en œuvre de l'Accord

Pour l'application du présent Accord, les autorités compétentes, les organismes de liaison et les organismes compétents utilisent la langue espagnole.

Article 21. Protection des informations

Toute information personnelle transmise d'une Partie contractante à l'autre, en vertu du présent accord, ne sera utilisée qu'aux fins de l'application de l'accord et sera protégée

conformément au principe de la protection de la vie privée et du secret de la vie privée, dans les conditions prévues par la législation nationale pertinente.

Article 22. Exemptions de taxes et dispense de certification

Tous les instruments, documents, arrangements et écrits relatifs à la mise en œuvre de l'Accord et de tout instrument additionnel sont exemptés de l'obligation d'attestation et de l'obligation de certification ou d'authentification par les autorités diplomatiques ou consulaires ; la certification par l'organisme compétent suffit.

Article 23. Devises, moyens de paiement et dispositions relatives aux devises étrangères

1. Les paiements prévus par le présent Accord sont effectués dans la devise de la Partie contractante qui effectue le paiement, conformément à la législation de chaque Partie contractante, à la date et par les moyens prévus par cette législation.

2. Si l'une des Parties contractantes impose des restrictions sur les devises étrangères, les deux Parties contractantes conviennent, sans délai, des mesures nécessaires pour assurer le transfert vers les territoires des deux Parties contractantes de toute somme payable en vertu du présent Accord.

Article 24. Responsabilités des autorités compétentes

Les autorités compétentes des Parties contractantes :

- a) établissent les arrangements administratifs nécessaires à la mise en œuvre effective du présent Accord ;
- b) désignent des organismes de liaison, qui peuvent établir des arrangements administratifs supplémentaires nécessaires à l'application effective du présent Accord ;
- c) communiquent les mesures adoptées au niveau national pour l'application du présent Accord ;
- d) notifient de toute modification de la législation visée à l'article 2 ;
- e) offrent leurs bons offices et la plus large assistance technique et administrative possible pour la mise en œuvre effective du présent Accord.

Article 25. Règlement des différends

Tout différend se rapportant à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent Accord et de tout instrument supplémentaire qui peut être signé est réglé par voie de négociation entre les autorités compétentes ou les organismes de liaison des Parties contractantes, selon le cas.

Titre VI. Dispositions transitoires

Article 26. Calcul des périodes antérieures à l'entrée en vigueur de l'Accord

1. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'une des Parties contractantes avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s'ouvrant conformément aux dispositions de cet Accord.

2. Ce qui précède ne modifie pas les règles applicables en matière de prescription et de déchéance en vertu de la législation de chacune des Parties contractantes.

Titre VII. Dispositions finales

Article 27. Durée de l'Accord

1. Le présent Accord est conclu pour une période non définie. Il peut être dénoncé par l'une des Parties contractantes. La notification de cette dénonciation sera faite par la voie diplomatique et l'Accord cessera de produire ses effets douze (12) mois après la date de la dénonciation.

2. En cas de dénonciation, les dispositions du présent Accord continueront à s'appliquer aux droits déjà reconnus, nonobstant toute disposition restrictive de la législation de l'une ou l'autre Partie contractante concernant les cas de bénéficiaires résidant à l'étranger.

3. Les Parties contractantes concluent un accord spécial pour garantir les droits en cours d'acquisition qui sont issus de périodes de couverture équivalentes accomplies avant la date de résiliation de l'Accord.

Article 28. Signature et adoption de l'Accord

Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la deuxième notification par laquelle les Parties contractantes s'informent mutuellement, par la voie diplomatique, que leurs exigences internes pour son entrée en vigueur ont été remplies. Les droits couverts par l'Accord depuis la date de son entrée en vigueur sont reconnus pour la même durée.

EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés ont signé le présent Accord.

FAIT à Lima, le 22 juillet 2011, en deux exemplaires, les deux textes faisant également foi.

Pour la République du Pérou :

[SIGNÉ]

Pour la République de l'Équateur :

[SIGNÉ]